

LOS EMPRESARIOS Y LA POLÍTICA

*Por Ricardo Tirado y Matilde Luna**

El pacto social del nuevo Estado surgido de la revolución mexicana, formado y conformado sobre todo en los años treinta y cuarenta, establecía como regla de funcionamiento del régimen político que los empresarios quedaran excluidos de la acción política pública, institucional y legítima.

Fue por eso que desde entonces y a lo largo de las décadas de los años cincuenta y sesenta, los empresarios sólo hicieron política "tras bambalinas" y su participación en la determinación de la acción pública tendió a restringirse a la esfera de la política económica —aunque en este ámbito contó de manera efectiva— mediante una compleja red de relaciones semiformales, que se conocieron con el nombre de "mecanismos de consulta".

El conflicto inicial y sus consecuencias politizadoras

En un contexto internacional de crisis y transformaciones de patrones de desarrollo y fórmulas políticas establecidas, la crisis económica interna, la relativa movilización popular y el reformismo oficial suscitaron un agudo conflicto ideológico político que deterioró los tradicionales canales de consulta y provocó una fuerte reacción empresarial contra el gobierno de Echeverría.

Esta reacción provocó un proceso de politización de los empresarios que les permitió alcanzar un alto grado de homogeneidad, unidad y autoconciencia (ello pese a que el mismo conflicto resucitó a las relativamente contrapuestas facciones políticas empresariales) y consiguió también desatar un movimiento de derecha que dividió a la burocracia política y finalmente derrotó al reformismo gubernamental, inaugurando así un período de franca disputa por la hegemonía. Algunas manifestaciones importantes de esa reac-

ción fueron: la creación del Consejo Coordinador Empresarial, el acercamiento al Partido Acción Nacional y la Iglesia, el debate sobre la creación de un partido empresarial, la realización de algunos paros empresariales, el fortalecimiento de la presencia empresarial en el espacio de opinión pública, la desacreditación de la figura presidencial y la desinversión y fuga de capitales.

Es de señalarse que en el momento más álgido del conflicto, los empresarios de la dura facción nortea dieron el impulso, decisivo aunque efímero, al movimiento de la reacción.

El reflujo despolitizador

Durante el gobierno de López Portillo, la "vuelta de la confianza" estimulada por la solicitud oficial de tregua, el doblegamiento de la tendencia democrática de los electricistas, la política de amplias concesiones a los empresarios y la euforia del *boom* petrolero, suscitó un reflujo de la acción y la politización empresarial, de tal modo que al final del sexenio, cuando la crisis económica se hizo muy aguda, el empresariado se encontraba otra vez despolitizado y dividido de acuerdo con sus intereses gremialistas y entregados a la especulación sus grupos más poderosos.

La nacionalización bancaria y sus efectos repolitizadores

La nacionalización bancaria fue posible, entre otras razones, porque tomó de sorpresa a los despolitizados y divididos empresarios y porque los atemorizó el constatar que el gobierno contaba todavía con una capacidad de movilización popular efectiva e inmediata en apoyo a la radical medida.

El acto expropiatorio produjo una serie de ricas consecuencias al inaugurar una nueva coyuntura caracterizada por la movilidad y el conflicto de fuerzas y proyectos, la politización de la crisis económica y la disputa nacional por el espacio económico político que antes detentaban los grupos

* Este artículo es deudor de nuestras discusiones con René Millán, sin embargo asumimos enteramente la responsabilidad de lo que aquí se dice. Véase el trabajo que hicimos en común los tres: *Una nueva voluntad política: los empresarios en los inicios del gobierno de Miguel de la Madrid*, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México, 1984.

financieros privados expropiados. Con este acto se fortaleció el gobierno dotándolo *en principio* de una mayor capacidad para asignar los recursos financieros nacionales y legitimándolo frente a los sectores populares que de inmediato apoyaron la expropiación; sin embargo, el mismo acto ahondó diferencias al interior de la burocracia política, que se magnificaron con las claras reticencias iniciales del nuevo equipo para aceptar el hecho de la expropiación bancaria. Vista desde otro ángulo, la expropiación engendró una grave crisis de legitimidad del gobierno frente a los empresarios al descafeinar al núcleo más poderoso de los grupos financieros que hegemonizaban a la clase, dando lugar a una vacante en el liderazgo y a una disputa entre las facciones políticas empresariales vueltas nuevamente a resurgir; repolitizó de manera inmediata a los empresarios, quienes súbitamente recuperaron la memoria de sus luchas contra el gobierno en el sexenio de Echeverría, y creó las condiciones para el lanzamiento *táctico* de un nuevo discurso empresarial que se caracteriza por su antipresidencialismo, sus denuncias de la corrupción (apoyadas en el propio discurso del candidato) y su antiautoritarismo, en el cual está ausente una veta democrática.

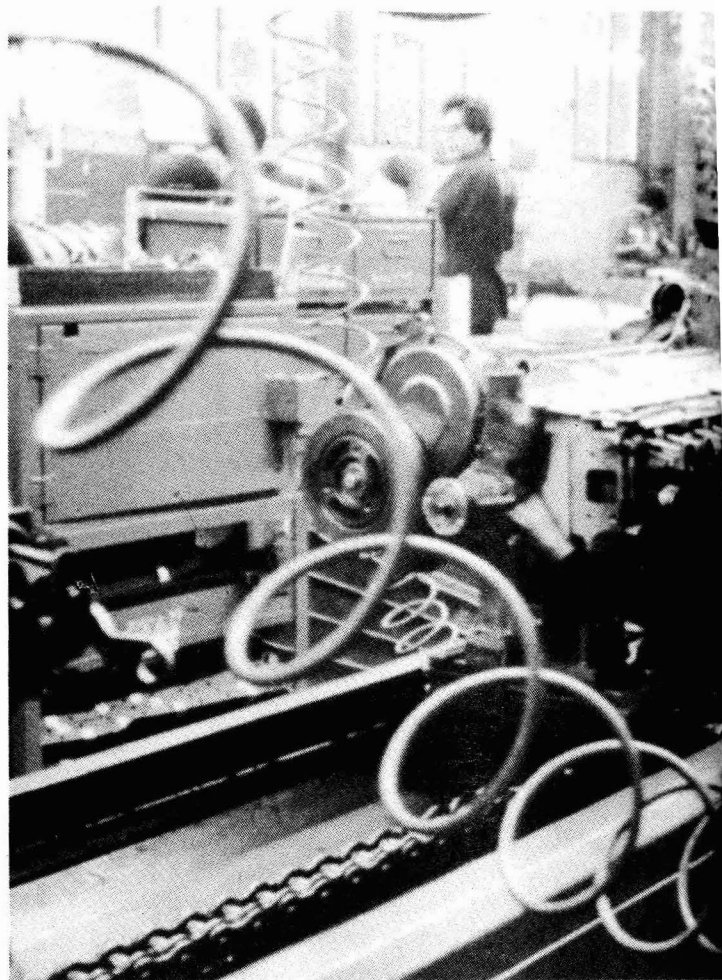
El inminente relevo presidencial, las diferencias interburocráticas y las reticencias del nuevo equipo impusieron a la iniciativa gubernamental un *impasse* que el empresariado (y ante todo su facción más dura) aprovechó para erosionar gravemente con su nuevo y agresivo discurso, la reciente legitimidad ganada por el gobierno el 1º de septiembre.

Propuesta gubernamental de bases para redefinir la alianza y rechazo empresarial

El nuevo gobierno debutó haciendo a los empresarios una propuesta de bases para redefinir su alianza. La propuesta, sin embargo, no recibió el beneplácito empresarial, pese a que en ella se hacían concesiones fundamentales a los empresarios: política económica "realista" que satisfacía plenamente sus demandas en este crucial terreno; discurso oficial tecnocrático, moralizador, legalista, austero y republicano que implícitamente descargaba la responsabilidad de la crisis en la anterior administración del propio gobierno, tal y como lo venían proclamando los empresarios; condena total del populismo, entendido éste no solamente como demagogia, manipulación e improvisación sino también como reformas sociales; freno legal, de rango constitucional, a una mayor expansión eventual de la economía estatal; y *last but not least*, devolución parcial de la banca nacionalizada y de las empresas no bancarias que eran propiedad de las instituciones expropiadas.

El rechazo empresarial obedeció a que el núcleo fundamental de la propuesta gubernamental era la confirmación de la nacionalización bancaria acompañada de una redefinición de la economía mixta (mas discursiva que real) que contempla ahora la "rectoría del Estado" y una "planificación democrática" en la que participarán, retomando pasadas experiencias tripartitas criticadas por los empresarios, tres y no dos sectores: el público, el privado y el obrero (rebautizado ahora como "sector social").

Fue ante todo esta confirmación del bancazo lo que hizo que los empresarios rechazaran la propuesta de redefinición de la alianza (con matices según las facciones empresariales) y se decidieran por la participación política abierta y organizada, de una manera que no tiene antecedentes en México.



Una nueva voluntad política empresarial

Desde la nacionalización bancaria tenemos un empresariado cualitativamente diferente: con un incipiente proyecto propio, con una mejor memoria de sus luchas del pasado reciente, con un discurso de probada eficacia y con una nueva decisión de hacer política.

Sin embargo, estos logros se ven afectados por problemas de consenso y capacidad de convocatoria de los líderes empresariales al interior de su propia clase. Inciden en esta situación la profundidad de la crisis económica que alimenta tendencias gremialistas y la "naturaleza" reactiva de la movilización empresarial, que la hace perder el momento político de la tensión y acumulación de fuerzas, para disiparse luego en el reflujo despolitizador.

Otro factor fundamental que milita también en contra de la politización empresarial, es el conjunto de amplias concesiones otorgadas por el gobierno a los empresarios, mismas que de hecho constituyen una modificación y enriquecimiento del paquete original de ofertas para la redefinición de la alianza que la facción Delamadridista lanzó en diciembre de 1982. Son ellas: la sostenida implementación de la política económica demandada por los empresarios; el regreso parcial de los empresarios a la dirección de la banca nacionalizada; la nueva legislación bancaria aprobada en diciembre pasado, que contribuye a la reprivatización del sistema financiero; el reciente anuncio de la venta de un importante número de empresas públicas, y las facilidades acordadas para el ingreso de nuevas inversiones extranjeras.

Todas estas nuevas medidas, aprobadas desde luego por



los empresarios, han funcionado como importantes soportes de la nueva alianza, que aunque no acaba de cristalizar enteramente —los empresarios quieren todavía más— sí se dibujan ya claramente algunos de sus aspectos en el horizonte.

La estrategia para retener el momento político de la tensión y el flujo, se perfila en un quehacer político empresarial, que tiene un sentido muy amplio, heterogéneo y complejo. Para efectos analíticos hemos distinguido tres vías o canales principales de acción: la vía económica administrativa, la vía política partidaria y la vía cívica.

A través de la vía económica administrativa se pretende asegurar una participación e influencia permanente de los empresarios en el centro de poder de donde emanan las más fundamentales decisiones de políticas públicas. Los empresarios tratan de realizar esa participación promoviendo un cierto tipo de corporativismo privatista, bipartita y excluyente que institucionalice los mecanismos de consulta y evitando experiencias como la de la Comisión Nacional Tripartita de los primeros setentas, no se “pervierta” politizándose. Al mismo tiempo esta propuesta está encaminada a excluir al máximo posible la presencia del sector obrero (o “social”) de modo que los empresarios no lleguen eventualmente a encontrarse en los órganos de planificación y decisión con una oposición en bloque de los representantes gubernamentales y obreros contra los suyos. De ahí un discurso en contra del corporativismo tripartita alegando que supone la legitimidad de la lucha de clases.

En el terreno de la política partidaria, la acción empresarial se ve dividida de tal modo que bajo el común denominador de hacer política, por un lado tenemos a la facción norte-

ña de los duros que tiende a articularse al PAN y a la Iglesia, y cuenta con un apoyo norteamericano, y por otro a la facción conciliadora que tiende a acercarse al PRI e incluso llegó a promover recientemente la creación de un cuarto sector empresarial afiliado a ese partido, con derechos iguales a los de sus tres sectores tradicionales.

Es de hacer notar que no obstante estas diferencias, existe un *desideratum* de actuar políticamente con vistas a obtener el reconocimiento del empresariado como actor político con presencia pública, legítima y organizada y posiciones específicamente políticas, para de ese modo garantizar la permanencia de los mecanismos de consulta existentes, ampliar los canales de participación empresarial en las máximas decisiones y en general asegurar el ingreso a nuevos espacios políticos ideológicos que sirvan de base a la promoción de su hegemonía.

Debido a este *desideratum*, los triunfos electorales panistas en el norte en 1983 y el fortalecimiento de la presencia empresarial en ese partido, han comenzado a refuncionalizar la reforma política —originalmente lanzada con una clara dedicatoria para la izquierda— en el sentido de un incipiente bipartidismo PRI-PAN que satisface plenamente los deseos empresariales.

La acción cívica, por su parte, se apoya en un discurso empresarial que interpela a la población oponiendo los gobernados a los gobernantes, la ciudadanía al gobierno y lo privado e individual a lo público y estatal, pretendiendo constituir un sistema articulado de organizaciones de la sociedad civil de todo tipo (de profesionistas, estudiantes, padres de familia, vecinos, amas de casa, etc.), que presenten un valladar infranqueable para el gobierno y que de ese modo lo contengan. Se trata de una acción con objetivos a largo plazo en la que de cumplirse las expectativas de los empresarios, estaría involucrada toda la “iniciativa privada”, entendida ésta como integrada por todos aquéllos que “no cobran un salario al gobierno” (inclusive los campesinos y los obreros), en contra del presidencialismo y el autoritarismo, y con vistas a consolidar la hegemonía empresarial en el país.

En la estrategia de esta acción cívica desempeñan un papel crucial los medios de comunicación masiva y sobre todo la televisión. A través de ellos el empresariado se propone ampliar su influencia en los espacios de opinión pública, incrementando los mensajes destinados a la formación de un público favorable a sus designios mediante interpelaciones que buscan constituir sujetos ciudadanos, privados, individualistas, consumistas y arribistas, profundamente antigobiernistas. De más está mencionar el éxito ya alcanzado por este propósito sobre todo en amplios sectores medios urbanos.

Estas tres vías de acción conforman simultáneamente el marco de las relaciones entre el gobierno y los empresarios y representan espacios de confrontaciones, negociaciones y acuerdos políticos que en la actualidad comienzan a cristalizar en una nueva alianza y a adquirir una direccionalidad —clara y acelerada en algunos aspectos, e imprecisa y lenta en otros.

Una última mención importante: este proceso de cristalización de la alianza entre el gobierno y los empresarios, está marcado por la grave crisis económica (que en general ha golpeado y debilitado a ambos actores), por la inercia de las viejas estructuras y por la eventual intervención —hasta ahora menor— de otros actores políticos. ◇